

Comentario nacional

El Informe Valech y su aporte a la democracia

Carlos Huneeus*

El Informe Valech, encargado por el presidente Lagos a mediados del 2003 a un grupo de destacadas personalidades, constituye un valiosísimo paso adelante en la decisión de los gobiernos de la Concertación de buscar la verdad y “hacer justicia en la medida de lo posible”, como acertadamente expresó el presidente Aylwin en 1990. La sucesión de tres gobiernos de una misma coalición ha permitido que exista una política continuada hacia la verdad y la justicia. Los dos principales hitos fueron el Informe Rettig, elaborado por la Comisión de Verdad y Reconciliación convocada por el presidente Aylwin apenas entró a La Moneda en marzo de 1990, y la Mesa de Diálogo, reunida por iniciativa del ministro de Defensa Edmundo Pérez a finales del gobierno del presidente Frei, cuando Pinochet estaba preso en Londres. En el documento emanado de la Mesa de Diálogo, suscrito por los representantes de las FFAA., se reconoció la responsabilidad por los atropellos a los derechos humanos cometidos por efectivos militares, alejándose así de la postura del general Pinochet que descalificó el Informe Rettig.

Los nuevos comandantes en jefe del Ejército, institución que por un cuarto siglo fue dirigida con mano de hierro por Pinochet, los generales Ricardo Izurieta y Juan Emilio Cheyre —cada uno con su estilo: menos político y mediático el primero, pero no menos efectivo que el segundo por la complejidad del momento que le tocó—, han dado pasos muy importantes para ayudar a la verdad y la justicia, asumiendo la responsabilidad de los delitos cometidos por personal de su institución. El

La entrega del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech, y el discurso del presidente Lagos dando a conocer sus resultados y su propuesta de reparación a las aproximadamente 28.000 víctimas, produjeron un enorme impacto en la opinión pública, incluso en sectores de la población que siguen manteniendo una opinión favorable hacia el régimen de Pinochet.

reencuentro del Ejército con los chilenos requiere una larga marcha, que ha comenzado muy bien.

RECHAZO DEL AUTORITARISMO

La lectura del Informe Valech la realiza una ciudadanía sensible a los horrores cometidos. Después de tres lustros del fin del autoritarismo, no se ha debilitado la inquietud ante ellos

y se fortalece la decisión de preservar la memoria histórica de esa época, expresión de solidaridad con las víctimas y reconocimiento hacia quienes defendieron los derechos humanos. No hay ni puede haber espacio para el olvido.

Las encuestas muestran el enorme interés de la amplia mayoría de los jóvenes por conocer lo ocurrido en el autoritarismo y condenan los excesos. Se les puede reprochar no inscribirse en los registros electorales, pero se debe valorar su voluntad por compartir los dolores de las víctimas y rechazar el olvido. Probablemente muchos de ellos discutirán sobre esos hechos con sus padres y les dirigirán la misma pregunta que los jóvenes alemanes tuvieron hacia los mayores en los años '60, cuatro lustros después del fin del régimen totalitario nazi: “¿qué hiciste esos años, estuviste en la oposición o colaboraste con la autoridad?”. Y la respuesta esperada por los jóvenes chilenos, al igual que los alemanes, es que sus padres no hubieran respaldado el autoritarismo.

* Abogado y cientista político, profesor, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

El interés por rechazar los excesos del régimen militar aumentó con la información del Senado de los EE.UU. sobre las millonarias cuentas del general Pinochet y su esposa en el banco Riggs, de Washington DC, que lo mostró como otro de los dictadores latinoamericanos que se enriquecieron en el poder. Dicha información afectó la imagen de Pinochet especialmente entre sus partidarios, que lo habían considerado una persona intachable, sólo preocupada del bien del país. Es penoso constatar que para ese sector de chilenos fueron más eficaces los dólares depositados en el Riggs para persuadirlo sobre la irracionalidad del autoritarismo que las informaciones entregadas antes sobre las muertes y las torturas.

LA REACCIÓN DE LA CORTE SUPREMA

El Informe Valech es un muy importante paso adelante en el conocimiento de los abusos cometidos, aunque no cierra las heridas del pasado, como lo sostiene el 65 % de los chilenos, mientras una minoría, 16 %, cree que sí, y uno de cada cinco chilenos no tiene opinión sobre este punto.

La reacción de la Corte Suprema ante el Informe ha sido frustrante por no haber lamentado que abdicó de sus facultades constitucionales, argumentando que un comportamiento distinto "probablemente no habría tenido resultados significativos". Afortunadamente para las víctimas y para Chile, el Comité pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad, los abogados y otros organismos de derechos humanos, partidos y grupos de interés no pensaron como el máximo tribunal y con admirable coraje y generosidad, ayudaron a disminuir los sufrimientos. ¿Qué habría ocurrido si los obispos y sacerdotes de la Iglesia hubieran actuado como la Corte Suprema? ¿Y si no hubieran actuado los abogados que defendieron a las víctimas, sabiendo que no conseguirían resultados con sus gestiones? ¿Habría sido similar la represión con una pasiva Vicaría de la Solidaridad?

Es cierto que la Corte Suprema ha tomado decisiones valiosas para hacer justicia por los crímenes cometidos. Pero habría bastado una palabra de arrepentimiento por su pasividad para contribuir a reparar su dañada imagen.

UN PAÍS DIVIDIDO

La persistencia de las divisiones se explican por la magnitud de los abusos cometidos por un orden político surgido de una profunda crisis política y que contó con el apoyo de una importante proporción de chilenos, incluso en los sectores populares. Todavía subsisten interpretaciones muy distintas del pasado. Mientras un 32% ve el 11 de septiembre de 1973 positivamente, como un día de liberación del marxismo, un 52% lo recuerdan en forma negativa, por haber destruido la democracia. Para un 35% de los chilenos "en 1973 hubo una guerra civil que obligó a los militares a



El Informe Valech, encargado por el presidente Lagos a mediados del 2003 a un grupo de destacadas personalidades, constituye un valiosísimo paso adelante en la decisión de los gobiernos de la Concertación de buscar la verdad y "hacer justicia en la medida de lo posible", como acertadamente expresó el presidente Aylwin en 1990.

actuar con mano dura"¹.

Ese 11 de septiembre es un hito en la historia de nuestro país porque tuvo un doble carácter: fue un día en que cayó la democracia que fue motivo de orgullo para la mayoría de los chilenos y admirada por muchos en el exterior, y se estableció un régimen autoritario. Fue un estado dual, ya que junto a la aplicación de

¹ Barómetro CERC, diciembre del 2004.



Los nuevos comandantes en jefe del Ejército, los generales Ricardo Izurieta y Juan Emilio Cheyre, han dado pasos muy importantes para ayudar a la verdad y la justicia, asumiendo la responsabilidad de los delitos cometidos por personal de su institución. El reencuentro del Ejército con los chilenos requiere una larga marcha, que ha comenzado muy bien.

la violencia represiva contra sus opositores, hombres y mujeres, impulsó importantes reformas institucionales que cambiaron el sistema económico. Ambos rostros del antiguo régimen estuvieron estrechamente ligados entre sí por una clase dirigente formada por uniformados de las tres ramas de las FFAA. y de Carabineros y de civiles, entre los que destacaron “los gremialistas”, los tecnócratas conocidos como “los Chicago boys”, personalidades vinculadas al antiguo Partido Nacional y numerosos independientes.²

El cambio de régimen político se debe a múltiples causas, que seguiremos analizando por décadas, pero otro tema es explicar los abusos cometidos en Chile y en el exterior por los nuevos gobernantes, incluso durante los años 80, como el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982 y la “operación Albania” de 1987, que costó la vida a doce personas. Una de las interpretaciones es que la coerción fue inevitable, impuesta por el contexto de la época. Esta interpretación carece de sentido, pues no existían factores que hicieran inevitable el empleo de la violencia. Los militares controlaron el país en pocas horas y, con la excepción del pequeño MIR —formado por universitarios de la media de Concepción y un puñado de adherentes de la capital— nadie optó por la violencia, ni siquiera los que en forma irresponsable desde fines de los años 60 se encandilaron con la revolución cubana y la vía armada difundida por la dictadura castrista.

Se pretende reescribir la historia de Chile desde esos años 60, como si estuviese dominada por acciones de violencia propagada

por los dirigentes de izquierda, centro y derecha. Ello no corresponde a un país que mantuvo un proceso democrático, con un sistema múltiple de partidos cuyo centro político no se desplomó en los momentos de mayor polarización. Fueron muchas las organizaciones y personalidades que no participaron en esa espiral de violencia y desplegaron enormes esfuerzos para evitar el desplome de la democracia. Desde la Iglesia Católica, que buscó un acuerdo entre el gobierno del presidente Allende y la oposición representada por el Partido Demócrata Cristiano, hasta los partidos de la época. Se silencia el hecho de que los comunistas rechazaron la tesis maximalista del Partido Socialista y condenaron la estrategia de la guerrilla propagada por Fidel Castro. De esas condiciones surgen las bases de la fortaleza de la coalición de gobierno. Los exitosos gobiernos de la Concertación, formada por personalidades que fueron actores de la política antes del desastre de 1973, han hecho un notable aporte al restablecimiento de las mejores tradiciones democráticas de Chile.

Existe un continuado apoyo en cierta prensa escrita que favoreció a la dictadura, por ofrecer espacio a los sostenedores de la tesis de la inevitabilidad de la violencia. Esta visión, compartida por algunos intelectuales y políticos de derecha, promueve la responsabilidad colectiva en los excesos y pone en un pie de igualdad a los criminales con políticos que, desde distintas posiciones, se esforzaron por impedir la tragedia de 1973. Además, esconde la admirable labor de quienes levantaron su voz y recurrieron a los tribunales desde los primeros días del nuevo régimen para defender la vida de quienes fueron sus adversarios hasta la noche del 10 de septiembre.

LA COMPLEJA REALIDAD DEL “GREMIALISMO”

El tratamiento de los excesos cometidos por el régimen militar es particularmente difícil para la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido fundado en 1983 y continuación del “Movimiento Gremial” creado por Jaime Guzmán, Jovino Novoa y otros estudiantes de la Universidad Católica en 1965.

La UDI se ha convertido en un poderoso partido y un militante de sus filas estuvo a escasos 31.000 votos de derrotar al candidato de la Concertación en las elecciones presidenciales de 1999. Ha recibido el respaldo de centenares de miles de chilenos, que saben que es una colectividad íntimamente ligada al régimen de Pinochet porque sus principales dirigentes ocuparon altos cargos políticos y le dieron apoyo político e ideológico. Guzmán cuestionó públicamente la defensa de los perseguidos que hizo la Iglesia Católica y en diversos escritos apoyó la doctrina de la seguridad nacional y las limitaciones a los derechos humanos promovida por ésta.³

2 Esto lo desarrollamos en Carlos Huneeus, *El régimen de Pinochet* (Santiago: Editorial Sudamericana, 2000).

3 Véase Rojas Sánchez, Gonzalo, Achurra, Marcela y Dussailant, Patricio, 1996, *De-recho Político. Apuntes de las clases del profesor Jaime Guzmán Errázuriz*, (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1996), capítulo 5, especialmente pp.149-150.

Los dirigentes de la UDI han tenido distintas posiciones hacia el pasado autoritario: a la vuelta de la democracia sostuvieron la tesis de la "guerra civil" y apoyaron a Pinochet, que se había quedado como comandante en jefe del Ejército; luego, se distanciaron de él por consideraciones electorales y, actualmente, rechazan los abusos, aunque comparten la tesis de la responsabilidad colectiva, reiterada en estos días por el presidente del Senado, Hernán Larraín, en el seminario del Ejército sobre derechos humanos y en entrevistas de prensa de fin de año.⁴

En algún momento la UDI deberá reconocer su responsabilidad política y no podrá esquivar hacer un *mea culpa* como lo ha hecho el Ejército. Una amplia mayoría de los chilenos, 73%, opina que los civiles que participaron en el gobierno del general Pinochet y que actúan en política hoy debieran hacer un *mea culpa* por las violaciones a los derechos humanos cometidas en esos años, mientras una muy reducida minoría, 14%, considera que no lo deben hacer. La posición por el *mea culpa* es compartida por un 49% de los votantes de la UDI, once puntos más que hace un año⁵.

¿CÓMO MURIÓ EDUARDO FREI MONTALVA?

No ha terminado de conocerse la magnitud de los excesos y hay procesos judiciales que pueden entregar nuevos e impactantes antecedentes. La familia del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) recurrió a los tribunales para esclarecer su sorpresiva muerte en enero de 1982, un mes antes del asesinato de Tucapel Jiménez por personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Pruebas que responsabilizan a efectivos de este mismo organismo en el asesinato en 1992 en Montevideo del químico Eugenio Berríos han sido reunidas por la justicia. Berríos fue activo colaborador de los servicios de seguridad, y se especializó en la preparación de elementos para eliminar personas sin dejar rastros, lo cual podría arrojar luz sobre las causas de la muerte de Frei. Dos generales de la DINE, organismo que tuvo un laboratorio clandestino que preparó productos químicos letales en esos años, están procesados por su responsabilidad en el asesinato de Berríos, cuando Pinochet era comandante en jefe del Ejército.

Es muy lamentable que los avances conseguidos por los abogados y la justicia en el esclarecimiento de la muerte del



La reacción de la Corte Suprema ante el Informe ha sido frustrante por no haber lamentado que abdicó de sus facultades constitucionales, argumentando que un comportamiento distinto "probablemente no habría tenido resultados significativos".

presidente Frei se consiguieran sin la colaboración del Ejército. Como en otros casos judiciales que comprometen a sus antiguos funcionarios, afirmó carecer de antecedentes.

Como muy bien señalaron Elizabeth Lira y Jorge Manzi, miembros de la Mesa de Diálogo e integrante de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura la primera, la herida abierta por las violaciones a los derechos humanos no se cerrará pronto, ni será fácil lograrlo. "Se podrá ir cerrando paulatinamente en la medida en que se haga justicia, se asuman las responsabilidades se contribuya a reparar el daño y aliviar el sufrimiento, y se establezcan condiciones que impidan la repetición de los hechos que nos han afectado como sociedad por más de tres décadas".⁶

También ayudará a cerrar esas heridas la verdad sobre lo ocurrido en esos años. El informe Valech es un paso importantísimo para alcanzar ese objetivo. Sin verdad, por dolorosa que sea, no hay justicia, y sin ella no hay democracia fuerte que esté en condiciones de entrar con la frente en alto al Bicentenario. ■

4 Por ejemplo, "¿Cuál ha sido mi tesis en el tema de derechos humanos, del indulto a los terroristas? Que cada uno fue responsable de lo que hizo, pero no de todo porque, en alguna medida, hubo una responsabilidad colectiva". "Todos los mundos del senador Larraín, El Sábado, *El Mercurio*, 31 diciembre de 2004, pp. 12-16, la cita es de p.16.

5 Barómetro CERC, diciembre de 2004.

6 Lira, Elizabeth y Manzi, Jorge, "Violaciones de DD.HH.: Una herida aún abierta", *Mensaje*, Nr. 515, Diciembre 2002, pp. 6-9, la cita es de p.9.